

# PERSPECTIVAS PERSPECTIVAS PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE  
ANÁLISIS POLÍTICO



# La tormenta que se avecina

Suplemento de análisis político - Edición 160

**M**ientras Daniel Ortega hacía promisorios planes de sus alianzas con Rusia y China, especialmente en el ámbito económico; Vladimir Putin decidió invadir militarmente a Ucrania generando una respuesta global de rechazo, sanciones y bloqueos que en el corto plazo podrían alcanzar a quienes permanezcan a su lado, apoyando la agresión. Días antes, Ortega apareció públicamente recibiendo a una delegación de funcionarios rusos, confrontando a Estados Unidos con su habitual diatriba antimperialista y respaldando a Putin; una semana después se negó a respaldar una declaración de rechazo en la Organización de Estados Americanos (OEA) y cinco días después se abstuvo de apoyar una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Aunque esa abstención pareciera la ratificación de su apoyo a Putin, en realidad representa un leve giro en el posicionamiento del régimen

anticipando que las sanciones pueden alcanzarlos. Mientras que en Nicaragua no ha detenido su lógica perversa para eliminar por completo a la oposición y cualquier acción de resistencia de parte de la ciudadanía, alimentado con la represión las condiciones para una nueva tormenta política.

## Los juicios de febrero

Después de más de siete meses en prisión, aislados, malnutridos, enfermos, acosados, con frío y bajo interrogatorios permanentes, la dictadura aceleró las farsas judiciales contra los presos políticos. Contra ley expresa, los juicios se están efectuando en la cárcel El Chipote, sin acceso público, no cumplen los mínimos procedimientos para garantizar un proceso justo en el que los acusados puedan defenderse y sus alegatos tomados en cuenta. En realidad no son juicios, sino una puesta en escena absurda y



Foto: Cortesía

arbitraria para justificar las condenas impuestas que estaban decididas desde el día en que ilegalmente los capturaron.

En Nicaragua no existe un poder judicial ni una fiscalía independiente; ya casi ni siquiera existen organizaciones civiles independientes porque en el reino de Ortega nadie puede ser neutral o tener criterio propio. En el país de su imaginación solamente hay dos clases de ciudadanos: los que se someten, callan y obedecen, o bien, los que están en la cárcel o en el exilio. Estas mujeres y hombres, hoy prisioneros, están allí porque a pesar de las amenazas y el acoso inclemente al que fueron sometidos, no se callaron y levantaron su voz contra las injusticias, los crímenes y las violaciones de derechos humanos. El pecado capital fue desafiar a Ortega sin que el miedo los atenuara.

Además de la saña vengativa con la que el régimen está tratando a sus rehenes, las recientes sentencias de entre 8 y 13 años contra los reos de conciencia tienen el propósito de enviar una amenaza a toda la ciudadanía. Quien levante su voz de cualquier forma o en cualquier espacio, será castigado severamente. Frente a su omnímoda voluntad no hay defensa posible; las leyes y los jueces son sus instrumentos de represión igual que la policía; si no quieren terminar en la cárcel deben someterse.

El mensaje no va dirigido solamente a los opositores y la ciudadanía que no apoya a Ortega, va dirigido también a sus propias bases. Ortega actúa igual que un jefe mafioso que asigna cuotas de poder o sumas de dinero a sus sicarios en pago por su lealtad absoluta, pero a cambio les exige una entrega de la que nunca podrán librarse. Así le recuerda a sus subordinados que nadie puede dudar, vacilar, o salirse de la red de corrupción y abusos sin recibir castigo pronto y demoledor, no importa que antes haya prestado servicios valiosos.

El ensañamiento de Ortega contra los líderes y activistas políticos encarcelados y la violación sistemática de sus derechos humanos ha provocado un grave deterioro en la salud de varios de ellos, particularmente los de mayor edad; tal como sucedió el 12 de febrero cuando el Ministerio Público anunció la muerte del General de Brigada en retiro, Hugo Torres Jiménez en un comunicado sin detalles concretos. Detenido desde el 13 de junio de 2021, Hugo Torres manifestó síntomas cada vez más alarmantes de un grave deterioro de su salud mientras estuvo encarcelado, su situación fue desestimada por las autoridades del penal quienes no proporcionaron la atención médica adecuada y oportuna a la que estaban obligados. No es posible saber en qué medida las condiciones carcelarias violatorias de los



Foto: Cortesía



Foto: Cortesía

derechos humanos pudieron desencadenar la crisis de alguna enfermedad que padeciera, pero está claro que sus carceleros, con criminal indiferencia, facilitaron el crítico agravamiento de su salud hasta llevarlo a la muerte.

La responsabilidad de la muerte de Torres recae directamente sobre Ortega y Murillo, quienes como jefes del Estado han promovido la desvalorización de la vida humana de sus críticos y opositores calificándolos como miserables, terroristas, golpistas y hasta “hijos de perra”; han promovido que sus subordinados actúen con el mismo desprecio a los derechos humanos. Son ellos quienes toman las principales decisiones sobre los presos políticos; de manera que la realización de una investigación por un organismo internacional independiente es la única manera de determinar las circunstancias que condujeron a su muerte y las responsabilidades específicas e individuales de los funcionarios involucrados.

La enorme presión y escándalo internacional desencadenados a raíz de la muerte de Torres obligaron a los Ortega-Murillo a cambiar el régimen carcelario a prisión domiciliar para cinco

de los prisioneros de mayor edad y condición de salud más crítica. Pero en El Chipote y otras cárceles hay al menos 16 personas mayores de 60 años, que sufren distintas enfermedades y condiciones de salud que amenazan sus vidas.

## Aventurerismo internacional

Hace algunas semanas Ortega se ufano de su alianza con el régimen ruso de Vladimir Putin como una respuesta al aislamiento y el desconocimiento a la legitimidad de su gobierno por parte de la comunidad internacional; con eso pretendía reafirmar a sus bases que no estaban solos y que potencias importantes lo respaldaban. También quería hacer creer a empresarios y a la población en general que se abrirían oportunidades de inversión, negocios y ayuda económica de la que podrían beneficiarse.

Esas ilusiones se desplomaron en poco tiempo cuando la invasión de Rusia a Ucrania dejó a Putin más aislado de lo que está Ortega, convertido en un paria internacional que enfrenta la condena de la mayoría de los países

del mundo. En lugar de sumar políticamente como Ortega esperaba, la alianza con Rusia se ha convertido en un pasivo político, tal como mostró el resultado de la votación de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas para exigir el cese de la invasión militar de Rusia a Ucrania, en la que un total de 141 países votaron a favor de la misma y tan solo 35 se abstuvieron, Nicaragua entre ellos.

La invasión exacerbó las contradicciones entre Rusia y los países occidentales al máximo nivel de tensión desde los tiempos de la Guerra Fría, época en la que los Estados Unidos y la OTAN estaban enfrentados a la Unión Soviética bajo la permanente amenaza de una guerra nuclear mientras impulsaban guerras periféricas para ganar áreas de influencia. Las circunstancias por supuesto son muy diferentes ahora, pues si en aquel entonces había una relativa paridad militar entre ambos bloques y casi toda Europa del este estaba controlada por la Unión Soviética, hoy el equilibrio militar ya no existe, la influencia rusa en el mundo es casi inexistente, y desde el punto de vista económico Rusia es una potencia de tercer nivel.

Ortega, todavía anclado en la mentalidad de la guerra fría, hizo su movida de acercamiento a Rusia buscando alguna suerte de protección política ante la supuesta agresión del imperialismo yanqui. Pero en las circunstancias actuales, el estrechamiento de esa alianza es una iniciativa aventurera que coloca a Nicaragua directamente en medio de un conflicto global de peligrosas proporciones que seguramente tendrá efectos sobre el país y el propio Ortega. En esta línea, debe subrayarse la declaración del Director del Departamento para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, quien señaló que las sanciones a Rusia, por diseño, traerán consecuencias para sus aliados en América Latina.

Dos semanas después de iniciada la invasión rusa a Ucrania, las sanciones económicas

internacionales ya han provocado fuertes estragos en la economía rusa con una estrepitosa caída del rublo, la expulsión de cuatro importantes bancos rusos del sistema SWIFT de transferencias internacionales, el desplome de la bolsa de valores, así como la prohibición de Estados Unidos de transacciones en dólares para el Banco Central. Otros países occidentales han congelado activos e inversiones y cientos de miles de ciudadanos rusos hacen fila en los bancos y cajeros automáticos para retirar sus depósitos. Distintos análisis coinciden en señalar que el efecto de estas sanciones y bloqueos sobre la economía rusa es profundo y la debilitará por muchos años; de manera que Putin, o quien le suceda, tendrá que concentrarse en su rescate y no tendrá capacidad para invertir o dar ayuda económica a otros países. En consecuencia, la proyección del régimen de Ortega en relación al apoyo de Rusia para paliar la eventual sequía de créditos de los organismos financieros internacionales o insuflar recursos a la economía nicaragüenses vía inversiones directas, queda completamente en entredicho.



Foto: Cortesía

En su deriva autoritaria, el régimen ha elevado a punto de quiebre las relaciones con Estados Unidos, el principal socio comercial de Nicaragua y origen de más de 1370 millones de dólares en remesas. Además, se ha empeñado en profundizar el aislamiento con el resto del mundo al alimentar los conflictos y la confrontación con distintas representaciones diplomáticas, tal como ha sucedido recientemente con la expulsión de facto de varios embajadores, entre ellos el representante de El Vaticano, el embajador de Colombia y la embajadora de España. El alineamiento con Rusia y su aventurerismo en Ucrania alienta a los políticos estadounidenses a proponer nuevas sanciones al gobierno de Ortega y a que se incremente la presión de los países europeos. Las consecuencias de esta política impactarán directamente en el empleo y en los ingresos de las familias más pobres. Nadie más que Daniel Ortega y Rosario Murillo serán los responsables de esa situación.

## La sociedad civil bajo ataque

La represión ha continuado cebándose en los activistas políticos, dirigentes sociales y otros integrantes activos de la oposición democrática; también se mantiene el cerco a los medios de comunicación y el acoso a periodistas independientes, reforzado con las sentencias impuestas a varios de los presos políticos por divulgar opiniones e información contrarias a las versiones gubernamentales bajo el argumento de los ciberdelitos. La represión sigue dirigida a aplastar cualquier intento de resistencia activa y destruir la capacidad de construir una plataforma organizada que represente un desafío creíble a la dictadura. Sin embargo, desde el año pasado la actividad represiva se ha extendido hacia las organizaciones sociales a fin de eliminarlas por completo.

Recientemente, el medio digital Confidencial publicó un reporte en el que consignan que entre 2018 y los primeros meses de 2022, el gobierno

ha ordenado la cancelación de personerías jurídicas a más de 100 asociaciones civiles; la mayoría de las cuales fueron canceladas en 2021 y 2022.

### Personerías jurídicas de organizaciones canceladas por año 2018-2022

Año	Cantidad
<b>2018</b>	9
<b>2019</b>	3
<b>2020</b>	2
<b>2021</b>	60
<b>2022</b>	40

La liquidación de las personalidades jurídicas pasó de ser una reacción contra el movimiento democrático de oposición a convertirse en una política de estado y ejecutarse como parte de un plan de control autoritario a gran escala. Entre las asociaciones y organizaciones canceladas hay centros de investigación y pensamiento, promotoras de derechos y democracia, desarrollo social, asociaciones médicas, filantrópicas, filiales de organizaciones internacionales que apoyaban proyectos en una gran cantidad de ámbitos, universidades y hasta clubes sociales.



Foto: Cortesía



Foto: Cortesía

Las razones esgrimidas son puerilmente administrativas, en la mayoría de los casos fabricadas por el Ministerio de Gobernación, pero la verdadera razón es el proyecto de dominación política e ideológica totalitaria de la dictadura Ortega y Murillo, tal como se puede observar en el caso de las universidades a las que además de cancelar las personerías, les fueron ocupados sus bienes y les impusieron autoridades leales al gobierno a fin de “controlar” a los jóvenes estudiantes y adoctrinarlos, pues los considera una potencial fuente de protestas y movilización. La característica común de todas estas organizaciones es su naturaleza autónoma, pues no seguían las consignas del orteguismo. Una característica no aceptada por el régimen orteguista que se siente amenazado por cualquier manifestación de independencia y autonomía. Con estas acciones Ortega está pasando de un enfoque de control de corto plazo a una estrategia de consolidación y normalización de la represión en el mediano y largo plazo.

Pero esa es una pretensión imposible de realizar. Si en el corto plazo Ortega tiene la impresión de haber logrado inmovilizar a la sociedad y que ha paralizado toda manifestación política o social, eso es un espejismo. La sociedad nicaragüense está en un proceso de cambio a pesar de ese control y represión, de manera que los términos de la ecuación de poder van a cambiar en el corto plazo. El poder autocrático de los Ortega-Murillo, por el contrario, tiende al inmovilismo y cada vez más se enajena de los realineamientos sociales y políticos, por ello sus instrumentos de control van perdiendo eficacia, la resistencia cívica no cesará y más bien adoptará nuevas formas.

Ortega tampoco puede aislar a Nicaragua del mundo exterior porque las redes sociales, la presencia de una gran comunidad de nicaragüenses en el exterior conectada con decenas de miles de familias dentro del país y la existencia de las plataformas de medios independientes, entre otros factores, facilitan el flujo de información, ideas, denuncias y demandas de cambio. De manera que su intento totalitario está condenado al fracaso.

La otra gran contradicción de su modelo de estado policial es que la anulación de todos los derechos y el cierre de cualquier espacio de expresión política y social está creando las condiciones para nuevos estallidos sociales. Fue precisamente el cierre de las válvulas para expresar y canalizar el descontento social lo que condujo al incremento soterrado e invisible de agravios y resentimientos que explotaron en abril del 2018.

Ortega y Murillo, ensoberbecidos por ejercer un poder casi absoluto durante tantos años, no son capaces de aprender las lecciones de la historia y orquestan una “fuga hacia adelante” exacerbando el control y la represión, los factores que condujeron a la crisis. En ese estado de situación, las condiciones de vida de la población no cambiarán, la seguridad jurídica seguirá ausente ni siquiera sus leales podrán vivir en paz, esperando la próxima crisis que estará siempre a la vuelta de la esquina y no podrán controlar.

# La rampante corrupción en Centroamérica

Recientemente, Transparencia Internacional dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción 2021. El informe revela que en términos generales, todos los países del hemisferio americano han empeorado y solamente dos países muestran mejoría. En Centroamérica, además que todos los países muestran índices de corrupción altos, están estancados o presentan deterioros significativos.

País	Puntuación
<b>Costa Rica</b>	58
<b>Panamá</b>	36
<b>El Salvador</b>	34
<b>Guatemala</b>	25
<b>Honduras</b>	23
<b>Nicaragua</b>	20

Según el Informe, Centroamérica se encuentra en su punto más bajo. Costa Rica, Panamá y El Salvador presentaron leves variaciones pero en general muestran un estancamiento; mientras que Guatemala, Honduras y Nicaragua experimentaron un descenso en sus puntajes que hace parte de una tendencia sostenida en el tiempo. La corrupción es uno de los factores más influyentes que afectan la democracia y los derechos humanos, además que promueve la impunidad.

En Centroamérica, con la debilidad de los Estados y la influencia de actores como el crimen organizado, la corrupción se ha convertido en un mal endémico, que se ha enraizado en la institucionalidad pública hasta

el más alto nivel, convirtiéndose en una práctica perversa de naturaleza sistémica.

Prácticamente todos los gobiernos de la región enfrentan denuncias de graves casos de corrupción, pero uno de los que más se destacó en febrero de 2022 fue la detención del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico por Estados Unidos y sobre quien pende una solicitud de extradición. En Guatemala, el gobierno de Alejandro Giammattei enfrenta serias acusaciones de corrupción y de emprender persecuciones y bloqueos a las instituciones encargadas de investigar y sancionar los delitos de corrupción, particularmente en contra de fiscales que han sido obligados a exiliarse.

El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador también persigue a periodistas, organizaciones sociales y ha avanzado un proceso de control que ha erosionado seriamente a las instituciones de justicia mientras que salen a la luz diversos casos en los que funcionarios públicos han sacado ventaja con negocios multimillonarios en el contexto de la pandemia por el Covid. En Nicaragua, el estilo autoritario, discrecional y centralizado impuesto por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha instalado la corrupción como una práctica institucional que trasciende el ámbito de lo económico y se traslada a otras esferas de la vida, especialmente la política; incluso la democrática Costa Rica padece este mal endémico y en las últimas semanas se han revelado las investigaciones a altos funcionarios públicos implicados en casos de corrupción que incluyen a alcaldes y ministros. Panamá también se ha estancado en la lucha contra la corrupción y hay serios señalamientos de impunidad a

figuras políticas vinculadas a denuncias de malversación de fondos públicos.

Las debilidades institucionales existentes en los países centroamericanos, así como la acentuada tendencia autoritaria de prácticamente todos los gobiernos constituyen alicientes de primer orden para alimenta las prácticas corruptas en la región. Es necesario un cambio que realmente destierre ese cáncer y brinde oportunidades de desarrollo a las sociedades centroamericanas.

## Nivel de Corrupción en Centroamérica

### En El Salvador



Se persigue a periodistas, organizaciones sociales y quiere controlar instituciones de justicia. Hay casos de funcionarios públicos con negocios multimillonarios en el contexto de la pandemia por el Covid.

### En Nicaragua



Se ha instalado la corrupción como una práctica institucional que trasciende el ámbito de lo económico y se traslada a otras esferas de la vida, especialmente la política.

### En Costa Rica



Se han revelado investigaciones a alcaldes y ministros implicados en casos de corrupción.

### En Honduras



Juan Orlando Hernández es acusado de narcotráfico por Estados Unidos y sobre quien pende una solicitud de extradición.

### En Panamá



Se estanca la lucha contra la corrupción y hay señalamientos de impunidad a figuras políticas por malversación de fondos.

### En Guatemala



El gobierno enfrenta acusaciones de corrupción, persecución y bloqueos a las instituciones encargadas de investigar y sancionar los delitos de corrupción.